

El crecimiento español y la asimetría europea en Innovación

El presidente del gobierno español en el Congreso de diputados evidenció, esta semana, la bonanza de la economía española en el momento actual. Un conjunto de datos económicos, ya conocidos desde principio de mayo, que nos sitúan en posiciones de privilegio en cuanto a la Unión Europea. Los datos reflejan la bonanza económica, aunque el crecimiento no se sustente en los pilares de la economía del conocimiento. Los nuevos datos traen a la memoria el *informe Global Information Technology Report 2005-2006, del Forum Económico Mundial*, en el cual se indica que España pasó del puesto 29 al 31 en el ranking que mide la capacidad de los países en cuanto al aprovechamiento y utilización de las innovaciones que aportan las TIC. Los datos demuestran que los países del norte y centro de Europa ocupan lugares de privilegio, mientras que los países del sur presentan datos alejados de los lugares que deberían ocupar por el volumen de sus economías (Portugal: 27, España: 31, Italia: 42, Grecia: 43), un hecho enraizado en las políticas de los estados y en las de Unión.

Es conocido que las políticas de la Unión están más enfocadas a modelos productivos con políticas de I+D+i avanzadas, las de los países del centro y norte de Europa, y no son las más adecuadas a las realidades socioeconómicas del tejido empresarial de los países del sur. El *Cercle per el Coneixement* en septiembre de 2005 ya alertó sobre este problema explicando que si bien el área supera los 100 millones de europeos y aporta el 25% del PIB comunitario, sólo dispone del 16% de los investigadores de la UE25 y ejecuta, aproximadamente, únicamente el 12% del gasto en I+D.

El tejido empresarial español, formado por un entramado de pequeñas empresas que aportan más del 50% del PIB, impide que reciba ayudas comunitarias, con la excepción de las universidades y centros de investigación que con su participación en proyectos europeos han conseguido excelentes resultados. Unos resultados que no son aprovechados por las empresas, al no disponer de modelos capaces de integrarlos y convertirlos en PIB, lo cual, conjuntamente al uso ineficiente de los potenciales tecnológicos comporta pérdidas de competitividad y el incremento de los riesgos derivados de la competencia global. Consecuentemente, es necesaria una política de innovación que contemple simultáneamente el apoyo a la creación de tecnología avanzada, para disminuir la dependencia, y facilite el incremento de la absorción de los avances por parte de las empresas, buscando el equilibrio entre: el avance científico, la productividad y la competitividad empresarial.

Estando la política europea enfocada a los sectores de alta tecnología, España debe asumir la responsabilidad de facilitar su uso y que la innovación llegue al tejido productivo. Tan sólo esta dualidad permite que la generación de ciencia y tecnología se traduzca en productividad, consecuentemente en progreso en línea con los objetivos de Lisboa acercándonos a los parámetros de I+D+i que caracterizan a los Estados Unidos y Japón, en un momento en que China e India ya empiezan a posicionarse hacia modelos económicos basados, no sólo en mano de obra, sino en el talento. Hay que recordar que los datos de la OCDE, correspondientes al 2003, ya indicaban que la UE invertía sólo un 1,95 del PIB en I+D+i, (1,11 en España) mientras que en Estados Unidos llegó al 2,76, siendo aportado en un 67% por las empresas, la UE sólo llegó al 55%. Tampoco podemos olvidar el bajo valor del importe a Capital de Riesgo en Europa, con relación al PIB, que no llegó al 65% del que registró en Estados Unidos.

Ahora que la economía española funciona no debemos olvidar que es la única de la Unión que creciendo y creando ocupación ha perdido productividad desde 1995. Es necesario recordar, como explica el último informe de SIE'05 de Telefónica, que entre 1995 y 2002 España perdió un 0,4%, mientras que el incremento medio de la

UE fue un 1,2%, y que el informe del "Consejo Asesor de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información" pone en evidencia que España ocupa las últimas posiciones en el cumplimiento de la Agenda de Lisboa y con tendencia a incrementar la distancia con los primeros.

Ahora es el momento de seguir trabajando, potenciando las políticas encaminadas a reforzar las bases para construir una economía competitiva, eficiente y eficaz, capaz de mantenernos en una situación de privilegio. ya que ello determinará nuestra posición y la competitividad de las empresas en el contexto internacional. Es necesario hacerlo, sabiendo que la política europea no se ajusta, por el momento, a las necesidades españolas, lo cual exige que sean las administraciones y cada una de nuestras iniciativas las que compensen esta asimetría entre el norte de Europa y los países del sur.

Antoni Garrell Guiu
Presidente del *Cercle per el Coneixement*
31 de Mayo de 2006